



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010024655 DEL 14/07/2014
POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual "se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que "La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los Decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de Samaná, del departamento de Caldas, es de categoría 6 y como prestador directo del servicio de aseo a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010011665, del 21 de abril de 2014, la SSPD decidió **DESCERTIFICAR** al municipio de Samaná, departamento de Caldas, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013:

- a). Cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUJ.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010011665 del 21 de abril de 2014

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010011665, del 21 de abril de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de Samaná, del departamento de Caldas, mediante el oficio No. SSPD 20144010206821, del 21 de abril de 2014, enviado por correo certificado el 25 de abril, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que el representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución SSPD No. 20144010011665, del 21 de abril de 2014, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010234181. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. éste documento fue entregado el 8 de mayo de 2014 en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

Ahora bien, el señor Wilder Iberson Escobar Ortiz, en su calidad de alcalde del municipio de Samaná, del departamento de Caldas, mediante documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20145290258212, del 20 de mayo de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010011665, del 21 de abril de 2014.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**3.1 Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos, los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que éste fue presentado por el alcalde del municipio de Samaná, del departamento de Caldas, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20145290258212 del 20 de mayo de 2014, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

"4. Que la descertificación, conforme lo expresado en los considerandos de la resolución referenciada, se debe a que el Municipio de Samaná, – Caldas NO REPORTO por lo menos el 30% de los formatos de tarifas aplicadas y facturación, para la vigencia 2012.

5. Que el Municipio de Samaná – Caldas no comparte este criterio, debido a que al Municipio de Samaná – Caldas, si presento en un porcentaje superior al 30% los formatos de tarifas aplicadas y facturación, para la vigencia 2012. Para probar lo manifestado, el Municipio de Samaná – Caldas anexa al presente recurso, para que sea tenido como prueba por la Superintendencia los pantallazos de que la información fue debidamente cargada en la plataforma del SUI, y la certificación de la información de la página del SUI, donde se relacionan los formatos rendidos por el municipio de Samaná – Caldas para la vigencia del año 2012.

6. Que la Resolución vulnera los principios de debido proceso, defensa, legalidad, contradicción, buena fe y confianza legítima por lo siguiente:

DEBIDO PROCESO

Conforme la normatividad vigente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene hasta el último día del mes de mayo del año 2013, para emitir el respectivo certificado correspondiente a la vigencia del año 2012, indicando si un Municipio o Departamento es certificado o descertificado. Siendo que la descertificación tiene consecuencias inmediatas, lo menos que se debería esperar, es que antes de tomar una medida como estas, la cual es de carácter sancionatorio, es que la Superintendencia de

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Servicios Públicos Domiciliarios haya solicitado aunque fuera una prueba sumaria al Municipio de Samaná – Caldas, de que efectivamente si rindió como mínimo el 30% de los formatos.

Decreto 1040 de 2012 artículo 11.

"Plazos y procedimientos. Para efectos del proceso de certificación anual, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en los artículos 9° y 10 del presente decreto, con base en los criterios e indicadores de cumplimiento que para cada año defina el Gobierno Nacional teniendo en cuenta las categorías de los municipios y distritos.

La información requerida para el proceso de certificación a través del Sistema Único de Información -SUI, será reportada por los municipios y distritos a más tardar el último día hábil del mes de julio de cada año, en los formularios y formatos que determine la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la autoridad competente para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, podrán verificar por cualquier medio la información reportada por las entidades territoriales respecto de lo que les compete en materia de certificación. Para el efecto podrán, entre otras cosas: solicitar soportes adicionales, confrontar información reportada con otras fuentes y adelantar la constitución de pruebas adicionales para la verificación de la información reportada."

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se tomó el mínimo trabajo de solicitar a la Administración Municipal explicación aunque fuera sumaria del motivo por el cual no se reportó como mínimo el 30% de los formatos, y se limitó a expedir un acto administrativo calificando la descertificación del Municipio de Samaná – Caldas, e indicando que contra el mismo solo procede el recurso de reposición. La solicitud de documentos, explicación o prueba alguna hubiera permitido que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tuviera más información para expedir la calificación, y más teniendo en cuenta cuando la calificación es negativa, no se tuvo el mínimo de cuidado para expedirla, sino que se procedió a emitirla sin un soporte adecuado, lo cual puede generar en un desgaste administrativo judicial, para que el acto administrativo en cuestión se realice un control adecuado por medio de otras instancias.

LEGALIDAD – DEFENSA Y CONTRADICCIÓN

La Resolución vulnera claramente los principios de legalidad, defensa y contradicción, debido a que se descertifica al Municipio por no rendir como mínimo el 30% de los formatos, pero este cargo o adecuación típica de orden administrativo, que tiene asidero legal, es incompleto, debido a que la Superintendencia DE Servicios Públicos no indica cuales formatos no fueron rendidos, ni que formatos si fueron efectivamente cargados, ni cual es el porcentaje exacto de los formatos que fueron rendidos por el Municipio de Samaná – Caldas. Esta situación deja en clara desventaja al Municipio de Samaná – Caldas para ejercer un derecho de defensa por medio del presente recurso de reposición, a la vez que no permite ejercer la contradicción alguna a las pruebas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por cuanto no existe prueba alguna para emitir la descertificación, simplemente la manifestación que el Municipio no cargo en un porcentaje igual o superior al 30% los formatos tarifarios.

BUENA FE Y CONFIANZA LEGITIMA

En la plataforma del SUI, se encuentra registrado que el Municipio de Samaná – Caldas ha cargado el 100% de los formatos. Esto hace inferir al Municipio que los formatos fueron cargados en su totalidad, y ahora con total sorpresa se manifiesta que no se rindió un porcentaje igual o superior al 30% de los formatos.

Cuál es entonces el motivo de la existencia de la página web del SUI, que indica que los formatos fueron cargados exitosamente?

Si no tuviera ninguna validez, bien podría decirse que no importa que la Superintendencia de Servicios Públicos a través de la página del SUI indique de manera "informal" que los formatos fueron cargados exitosamente, ya que lo único que tiene importancia o validez jurídica es la Resolución por la cual cada año si indica si un Municipio es certificado es descertificado.

Esta premisa no es cierta. Toda manifestación de la voluntad o expresión del Estado es una acto administrativo, y esto es lo importante, que no darle validez de acto administrativo al certificado de la página web del SUI, sería como manifestar que no es una expresión de la voluntad del Estado y por lo tanto nunca ha nacido a la vida jurídica, y en consecuencia no existe.

Tan peligrosa como paradójica sería considerar que la certificación de la información de la presentación de los formatos SUI, respecto al cargue de los mismos no tenga ninguna validez, debido a que este

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

argumento pone en peligro grave los principios de la buena y la confianza legítima, pilares de un estado social de derecho."

(...)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constitución Política de Colombia, Ley 1437 de 2011, Resolución No. SSPD 20144010011865 del 21 de abril de 2014 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y además normas concordantes y complementarias.

CONSIDERACIONES

DEBIDO PROCESO

Es claro al afirmar, que existe una clara vulneración al debido proceso, por cuanto la Superintendencia en ningún momento realizó manifestación de que la información no fue cargada al SUI. Teniendo todas las herramientas para que como mínimo antes de la expedición de la Resolución recurrida si quiera hubiera permitido al Municipio de Samaná – Caldas aportar pruebas e su defensa, lo cual no ocurrió.

LEGALIDAD, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN

Corte Constitucional Sentencia C -633 de 2012.

"ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS – Exigencia del principio de legalidad/ PRINCIPIO DE LEGALIDAD – vigencia en relación con la función sancionatoria del Estado.

Considera la Corte que el artículo 29 constitucional, referido al principio de legalidad de las actuaciones administrativas, tiene plena aplicación frente a las disposiciones contenidas en la Ley 1476 de 2011, relativas al régimen de la responsabilidad administrativa de las personas naturales que prestan sus servicios al Ministerio de Defensa Nacional, o a sus entidades adscritas o vinculadas o la fuerza pública, con ocasión de daños o pérdidas de bienes de los mismos, que contemplan que el Legislador haya definido previamente la conducta reproachable, la consecuencia de ella, la autoridad competente para realizar la declaración de responsabilidad y el procedimiento con el cual será juzgado. El principio de legalidad tiene plena vigencia en relación con la función sancionatoria del Estado. Tal regla comienza desplegándose especialmente en el ejercicio del ius punendi, mas de conformidad con la jurisprudencia constitucional, los principios del derecho penal aplican a todas las formas de actividad sancionadora administrativa del Estado, no obstante, en los otros ámbitos dicha operación cuente con sus propias particularidades (C.P., art. 29). Sin embargo, "la definición de un infracción debe respetar los principios de legalidad y proporcionalidad que gobiernan la actividad sancionadora del Estado". Sobre la base de que "Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad, según el cual las conductas sancionables no sólo deben estar descritas en norma previa (tipicidad) sino que, además deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa". Además, es claro que el principio de legalidad implica también que la sanción debe estar predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la sanción a ser impuesta pues, como esta Corporación ya lo había señalado, las normas que consagren las faltas deben estatuir "también con carácter previo, los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurrir en aquellas"

Es clara la vulneración al principio de legalidad, tipicidad, defensa y contradicción por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por cuanto tratándose que se establece una infracción de tipicidad administrativa, que establece que sera descertificado el Municipio que no rinda como mínimo el 30% de los formatos solicitados para la vigencia del año 2012, lo mínimo que se espera para la adopción de descertificación es que la Superintendencia expreso que formatos no se rindieron, haciendo por lo menos un análisis aunque fuer poco mínimo o hasta corto, lo cual no sucedió, simplemente la Superintendencia se limito a manifestar que no fueron rendido el mínimo de los formatos, lo cual no permite ejercer una adecuada defensa en contra del acto administrativo recurrido.

BUENA FE Y CONFIANZA LEGITIMA

La Administración Municipal, tiene la confianza legítima de que la información fue cargada en forma correcta. Este argumento no es una mera suposición, sino que tiene pleno asidero en la Administración Municipal. En la plataforma del SUI, y los pantallazos emitidos por el SUI se encuentra registrado que la información fue cargada exitosamente en la plataforma. Esta información, incluso a la fecha del presente recurso de reposición, continua siendo publicada en la plataforma del SUI. Esta Resolución desconoció totalmente los principios de buena fé y confianza legítima.

Como se dijo anteriormente, nunca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, manifestó al Municipio de Samaná – Caldas que la información no había sido cargada exitosamente, sino todo lo

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

contrario, se manifestaba por la Superintendencia a través de la página del SUI, que el Municipio había cargado el 100% de los formatos solicitados.

Ley 1437 de 2011 artículo 3, numeral 4 expresa:

"Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

(...)

En materia administrativa sancionatoria, se observaran adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.

7. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento legal y fiel, de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes."

La aplicación de la buena fe en las actuaciones de los particulares y del Estado no sólo es un principio general del derecho y de ética de comportamiento, sino que es un precepto de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, la constitucionalización de este principio en el artículo 83 de la Carta evidencia su carácter correlativo o recíproco, pues supone, de un lado, la garantía para el administrado de que el Estado presume que así actúa frente a él y a los demás particulares y, de otro, el deber de comportarse de buena fe en todas las relaciones, de tal forma que tanto la administración como el administrado deben adoptar comportamientos leales en el desenvolvimiento de sus relaciones.

La buena fe como principio constitucional no solo aplica a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas, siendo en el caso concreto el Municipio de Samaná – Caldas, quien siempre estuvo confiando en que había presentado los formatos, y sólo hasta la fecha de notificación de la Resolución recurrida, se entero que la Superintendencia no le otorga ninguna validez a la certificación emitida por el SUI."

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado No. SSPD 20145290258212, del 20 de mayo de 2014, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Cuarenta y dos (42) pantallazos de cargue de información al SUI.

3.3.2. Solicita el recurrente, se decreten los testimonios de las siguientes personas:

3.3.2.1. El señor Jorge Yovany Muñoz Ospina, en su calidad de Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Samaná.

3.3.2.2. El señor Jesús Andrés Jaramillo Gómez, en su calidad de Contratista de la Alcaldía del municipio de Samaná, encargado de realizar el cargue de la información al SUI.

3.3.3. Solicita el impugnante que esta superintendencia certifique:

3.3.3.1. Identificación plena del 100% de los formatos de tarifas aplicadas y facturación para la vigencia del año 2012, que se deben rendir ante la superintendencia, indicado cuantos formatos componen el 100% de los mismos.

3.3.3.2. Cuántos formatos de tarifas aplicadas y facturación para la vigencia del año 2012, rindió el municipio de Samaná para la vigencia 2012.

3.3.3.3. Se remita al presente proceso certificación del porcentaje de los formatos tarifas aplicadas y facturación para la vigencia 2012 rendidos por el municipio de Samaná.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. De las pruebas solicitadas

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

4.1.1. Con relación a las pruebas testimoniales solicitadas, esta entidad manifiesta lo que sigue:

El Consejo de Estado ha interpretado en el siguiente sentido las normas relativas a la práctica de pruebas en el curso de un procedimiento administrativo:

"De una parte, el hecho de que la autoridad niegue la práctica de una prueba, no implica per se desconocimiento del debido proceso y el derecho de defensa, pues no hay que olvidar que la conducencia y la eficacia de los medios probatorios son principios que informan la práctica de las pruebas. Como es sabido, la conducencia de la prueba, es la aptitud legal o jurídica que tiene esta, para convencer al fallador sobre el hecho a que se refiere. Este requisito, como lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia, persigue un fin que apunta a la economía procesal, evitando que se entorpezca y dificulte la actividad probatoria con medios que de antemano se sabe no prestarán servicio alguno al proceso." (Negrilla fuera de texto).

Ahora bien, la entidad también considera pertinente acudir a la normativa vigente en materia probatoria para definir con claridad las características que las pruebas deben cumplir para ser decretadas, por lo cual resulta ineludible la remisión al Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, que establece lo siguiente: "Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles." (Negrilla fuera de texto)

El Consejo de Estado también ha analizado las propiedades que deben cumplir las pruebas para que las mismas sirvan al proceso, tal como lo describe en el extracto jurisprudencial que se cita a continuación:

*"Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley."*² (Negrilla fuera de texto)

Es así como de la normativa vigente, junto con la jurisprudencia del Consejo de Estado, es posible abstraer las siguientes conclusiones: (i) corresponde a la autoridad administrativa o judicial definir si la prueba solicitada satisface de los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, (ii) como resultado de ese juicio de valoración puede legítimamente resolver negar la práctica de las mismas, y (iii) dicha denegación no significa *per se* la violación del derecho fundamental al debido proceso.

En el recurso bajo revisión, la entidad advierte que la solicitud de la prueba correspondiente a los testimonios de los señores Jorge Yovany Muñoz Ospina y Jesús Andrés Jaramillo Gómez, no cumple con los requisitos de pertinencia, utilidad y necesidad, para efectos de acreditar el criterio que se discute, puesto que la obligación de cargar al menos el 30% de las tarifas aplicadas y la facturación, que se estudiará en detalle en este Acto Administrativo, no es susceptible de comprobarse mediante testimonios, dado que el mencionado reporte sólo se evidencia en el Sistema Único de Información - SUI; en este sentido, se procederá a examinar la información allegada por el municipio con el recurso, así como la que él mismo cargó en el SUI, confrontándola con la información que se debía reportar antes de la fecha máxima de cargue de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013. Así las cosas, se considera que de decretar las pruebas testimoniales "no prestarán servicio alguno" al presente caso, habida cuenta de que como ya se mencionó, lo que se va a analizar es un asunto meramente informático de cara a la exigencia normativa.

Como resultado del anterior análisis, la superintendencia deniega la práctica de las pruebas testimoniales solicitadas.

4.1.2. En lo referente a las pruebas cuyo objeto es que la SSPD certifique plenamente el 100% de los formatos de tarifas aplicadas y facturación para la vigencia del año 2012, que debía reportar el municipio, y los que efectivamente reportó, se manifiesta al señor alcalde de Samaná, que lo solicitado va a ser objeto específico de examen en esta Resolución, en el siguiente numeral (4.2).

4.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el reporte al SUI del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI.

¹ Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2010. Radicación No. 25000-23-25-000-2000-05721-01(2920-04). M. P. Dr Luis Rafael Vergara Quintero.

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia, Auto del 19 de agosto. Radicación 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093). M. P. Hugo Fernando Bastidas Becerra.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Manifiesta el recurrente, que el municipio de Samaná reportó un porcentaje superior al 30%, de los formatos de tarifas aplicadas y facturación del servicio de aseo, para la vigencia 2012 y que como prueba de ello allega los pantallazos de acreditan que la información fue debidamente cargada al SUI.

Para abordar el estudio de este criterio, esta entidad considera oportuno señalar lo que sigue:

El Decreto 1639 de 2013 en su artículo 5°, dispuso como uno de los criterios adicionales que debían cumplir los municipios prestadores directos "a) *Cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI*".


Si se lee detenidamente el texto del citado criterio, se observa que el legislador estableció que los municipios debían reportar al SUI entre tarifas aplicadas y facturación de los servicios que prestaban directamente los municipios y/o distritos, como mínimo el 30%; es decir, no hizo distinción alguna frente a qué porcentaje de cargue debía realizarse para tarifas aplicadas y qué porcentaje de cargue debía efectuarse para facturación, para acreditar el cumplimiento de este criterio, de ahí que dicho porcentaje se obtuviera de i) sumar los reportes certificados de ambos ítems (sin discriminar porcentajes entre uno y otro), ii) dividir dicha sumatoria entre la totalidad de los cargues que debía realizar el municipio, y, iii) multiplicar este resultado por 100, con el objeto de establecer si con el total arrojado de dicha operación matemática se cumplía con el porcentaje mínimo exigido en el citado Decreto.

En términos de fórmula, ésta sería así:

$$\% = \frac{\text{Formatos certificados}}{\text{Formatos que debía reportar}} \cdot 100$$

Así las cosas, y con la aclaración de la metodología utilizada para el estudio de este requisito, esta superintendencia pasa a establecer si el municipio de Samaná cargó en el SUI los formatos de facturación para la vigencia 2012, antes del 30 de agosto de 2013, precisando que el total de formatos habilitados que debían ser acreditados son 24, de los cuales 12 corresponden a la facturación del servicio de aseo, y 12 a las tarifas aplicadas de aseo.

FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO:



| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|------|------|--------------------|----------|----------|--------|------------|------|--------------------------------------|------------|---------|------------|----------|---------------|------|
| AM | ID | NOVID | INT Y DV | SE | TOP | PER | PER | FORMATO | APLICA | ESTAT | ACTO | FECH | FECH DE CERTI | CIÓN |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | ABRIL | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2012-07 | 2013-09-26 | 21:28:42 | | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | AGOSTO | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2012-11 | 2013-11-20 | 13:30:48 | | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | DICIEMBRE | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2013-03 | 2013-09-27 | 07:29:54 | | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | ENERO | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2013-04 | 2013-09-26 | 18:33:50 | | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | FEBRERO | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2012-05 | 2013-09-26 | 18:35:11 | | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | JULIO | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2012-10 | 2013-09-26 | 21:30:21 | | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | JUNIO | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2012-09 | 2013-09-26 | 21:30:21 | | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | MARZO | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2012-06 | 2013-09-26 | 19:55:36 | | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | MAYO | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2012-08 | 2013-09-26 | 21:09:33 | | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | NOVIEMBRE | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2013-02 | 2013-09-27 | 07:18:10 | | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | OCTUBRO | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2013-01 | 2013-09-24 | 23:00:57 | | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD D 800801149 | ASEO | Comercia | MENSUA | SEPTIEMBRE | 23.1 | FACTURACIÓN C+ Cargue M+ Certificado | Resolución | 2012-12 | 2013-11-29 | 15:40:43 | | |

Reporte formato facturación: 12 cargues extemporáneos.

Como puede observarse de los reportes que arroja el SUI, el municipio de Samaná cargó extemporáneamente los 12 formatos que tenía habilitados para facturación del servicio de aseo.

En efecto, en la columna N denominada "FECHA DE CERTIFICACIÓN", aparecen relacionadas fechas posteriores al 30 de agosto de 2013, siendo esa la fecha límite de cargue dispuesta por el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013.

Ahora bien, respecto a los formatos de "TARIFAS APLICADAS" del servicio de aseo, del año 2012, se encontró lo siguiente:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

SERVICIO DE ASEO – Tarifas aplicadas:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|------|------|----------|--------|-----|----|-------|-----------|---------|------------|---------------------|--------|---------------|--------|------------------------|---------------------|
| AN | CD | NOMB | NIT | US | SE | TOPIC | PERG | PERIO | FORMATO | APLIC | ESTADO | ACTO | FECH | FECHA DE CERTIFICACIÓN | |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | ABRIL | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2012-03-20 | 2012-11-28 18:53:37 |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | AGOSTO | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2012-08-20 | 2014-03-31 12:01:20 |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | DICIEMBRE | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2012-12-31 | 2014-03-31 12:42:28 |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | ENERO | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2013-01-31 | 2012-11-29 11:14:51 |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | FEBRERO | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2013-02-28 | 2012-11-29 11:14:51 |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | JUNIO | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2013-06-30 | 2012-11-29 17:48:22 |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | JULIO | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2013-07-31 | 2012-11-29 17:33:08 |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | MARZO | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2013-04-30 | 2012-11-29 14:23:49 |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | MAYO | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2013-05-31 | 2012-11-29 17:11:29 |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | SEPTIEMBRE | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2013-09-30 | 2012-11-29 17:11:29 |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | OCTUBRE | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2013-10-31 | 2014-03-31 13:14:06 |
| 2012 | 2745 | UNIDAD 0 | 690001 | 149 | A | ASEO | Comercios | MENSUAL | SEPTIEMBRE | 0. TARIFAS APLICADA | Cargue | M. Certificad | CIRCUA | 2012-10-31 | 2014-03-31 13:04:09 |

Reporte formato tarifas aplicadas aseo: 7 cargues certificados dentro de término
5 cargues certificados extemporáneamente

Como puede observarse de los reportes que arroja el SUI, el municipio de Samaná cargó extemporáneamente 5 de los 12 formatos habilitados, mientras que los 7 restantes fueron cargados dentro de término.

Al respecto esta superintendencia se permite recordar que el Decreto 1639 de 2013, estableció requisitos de carácter formal para acreditar el cumplimiento de los criterios tendientes a la certificación de los recursos del Sistema General de Participaciones; así las cosas, conforme a lo señalado en el artículo 7° de la citada disposición, la información requerida debía ser reportada al SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013.

Pues bien, partiendo que la anterior es una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012, según el cual, *"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley"*, se concluye que los cargos realizados por el municipio de Samaná respecto de la facturación de aseo en los meses de septiembre y noviembre de 2013 y con relación a las tarifas aplicadas en el mes de marzo de 2014, son extemporáneos.

Con fundamento en lo señalado en precedencia, esta superintendencia entra a calcular el porcentaje de cargue al SUI realizado por el municipio de Samaná, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 1639 de 2012, para tarifas aplicadas y la facturación:

$$\% = \frac{7 \text{ (formatos cargados de tarifas aplicadas y facturación)}}{24 \text{ (formatos que debía cargar del servicio de aseo en cuanto a facturación y tarifas aplicadas)}} \cdot 100 = 29\%$$

El porcentaje de cargue al SUI de tarifas aplicadas y la facturación para el SGP-APBS, vigencia 2012 por parte del ente municipal fue del 29%, el cual no alcanzó el mínimo requerido por el Decreto 1639 de 2013 del 30%.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del 30% de cargue al SUI de facturación y tarifas aplicadas, toda vez que el reporte de cargue entre ambos ítems fue del veintinueve por ciento (29%).

4.3 Otros argumentos señalados por el recurrente

Conceptúa el impugnante que la Resolución mediante la cual se descertifica al municipio de Samaná, vulnera los principios de debido proceso, defensa, legalidad, contradicción, buena fe y confianza legítima.

4.3.1 Argumentos frente al debido proceso.

Señala el recurrente, que en este proceso de certificación, la superintendencia violó el debido proceso, por cuanto no solicitó aunque fuera una prueba sumaria al municipio de Samaná, para corroborar que efectivamente reportó como mínimo el 30% de los formatos y que procedió a expedir la Resolución de descertificación "sin un soporte adecuado".

Esta entidad inicia señalando que el artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho al debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; ahora bien, esta garantía procesal reconocida a la persona (natural o jurídica, pública o privada), tiene como finalidad que no pueda resultar sancionada o perjudicada por decisiones de la autoridad que desconozcan las oportunidades establecidas por la ley para intervenir y defenderse.

Teniendo como pilar de las actuaciones administrativas, como la que nos ocupa, el respeto por el debido proceso, haremos referencia a lo que se ha denominado debido proceso administrativo; al respecto, la Honorable Corte Constitucional al pronunciarse frente a este tema, señaló: *"Así, a partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende como un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadena la actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados a resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que gobiernan la función pública y que enuncia el canon 209 superior. Estos principios son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad"*.³

Así mismo, el máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, en sentencia T - 2.897.231 de 2011, señaló que son garantías del debido proceso administrativo, entre otras, las siguientes: (a) el derecho a conocer el inicio de la actuación, (b) a ser oído durante todo el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que se adelante por autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (e) a que no se presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la presunción de inocencia, (g) a ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a controvertir aquellas que aporte la parte contraria, (i) a que se resuelva en forma motivada la situación planteada, (j) a impugnar la decisión que se adopte y a promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.

Con fundamento en el señalado y revisado el procedimiento llevado a cabo por esta superintendencia, el cual terminó con la descertificación del municipio de Samaná, se estableció que el proceso adelantado en el marco de la certificación para la administración de los recursos del SGP-APSB, para la vigencia 2012, cumplió a cabalidad con los presupuestos exigidos por la norma constitucional y jurisprudencia, acerca de las garantías que aseguran el debido proceso, a saber:

Ahora bien, esta entidad con oficio SSPD 20134010143011 del 27 de marzo de 2013, le informó al alcalde de Samaná las obligaciones a cargo de la administración municipal frente al cargue de información al SUI para los procesos de certificación en coberturas mínimas y SGP - APSB (vigencia 2012), además de hacerle referencia a los requerimientos realizados por la PGN en las Directivas 015 de 2005 y 05 de 2008; así mismo con el citado oficio se le informó al burgomaestre que podía acceder al diagnóstico de su municipio para el proceso de certificación SGP-APSB, en el cual le informaba los requisitos que se consideraban acreditados y los que faltaban por acreditar. Es decir, al ente territorial se le comunicó oportunamente el procedimiento y los criterios para obtener la certificación en mención, así como los diagnósticos con corte a 31 de octubre de 2012, 31 de mayo y 15 de agosto de 2013. A continuación se adjunta imagen del último diagnóstico, en el cual se consignó que el municipio con corte a 15 de agosto de 2013, sólo había reportado el 25% de los formatos de tarifas aplicadas y facturación del año 2012.

³ Corte Constitucional. Sentencia C -610 del 1 de agosto 2012. MP Luis Ernesto Vargas Silva

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

| | | |
|--|--|---|
| 7. Reporte al Sistema Único de Información -SUI con la oportunidad y la calidad que se determine | (I) Cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y facturación al SUI de la vigencia a certificar. | El municipio ha reportado el 25.00% de los formatos Tarifas Aplicadas y Facturación del año 2012. |
| 8. Cumplimiento de las normas de calidad de agua para el consumo humano, establecidas por el Gobierno Nacional | (I) Reporte al SUI del acta de concertación de puntos y lugares de muestreo. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 1639 del 31 de julio de 2013. En caso de no poder acreditar el criterio de la forma descrita podrá: (II) Reportar al SUI la solicitud suscrita por el municipio prestador directo y radicada ante la autoridad sanitaria competente, que contenga la propuesta para la concertación de los lugares y puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en la red de distribución, antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados. | El municipio no fue prestador directo del servicio de acueducto a 31 de diciembre de 2012, por lo tanto no le aplica el cumplimiento de este requisito. |

Observaciones:

- Se observó a través del RUPS que el municipio fue prestador directo del servicio de aseo.
- Este documento corresponde a un diagnóstico de la información reportada al SUI antes del 15 de agosto de 2013 por el municipio de SAMANA - CALDAS y no es el análisis definitivo. En cuanto al requisito 1 relacionado con el reporte de información al FUT, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es la Entidad competente para analizar el mismo, razón por la cual no se encuentra en este reporte.

Así mismo, el auto de apertura del proceso SGP-APSB, vigencia 2012, número SSPD 20134010010496, del 20 de septiembre de 2013, fue comunicado al municipio con oficio SSPD 20134010610371, y remitido por correo certificado el 26 de septiembre de 2013.

Ahora bien, una vez expedida la Resolución de descertificación No. SSPD 20144010011665, del 21 de abril de 2014, este acto administrativo fue debidamente motivado y notificado a los interesados de conformidad con los presupuestos de Ley, para lo cual se le brindó al ente territorial la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y por consiguiente, de impugnar la decisión, al advertirle que contra la decisión adoptada procedía el recurso de reposición que aquí se decide.

Igualmente debe señalarse que esta superintendencia es la autoridad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1176 de 2007.

Así pues, resulta claro que la Resolución No. SSPD 20144010011665, del 21 de abril de 2014, no es un acto violatorio del debido proceso, y por el contrario, constituye una muestra evidente de su desarrollo y de la aplicación de los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción que rigen las actuaciones administrativas; de otro lado, con lo expuesto en este Acto Administrativo, se demostró que la decisión impugnada se fundamentó en la revisión de requisito por requisito, lo que derivó en la determinación de que el municipio no alcanzaba el porcentaje mínimo de cargue de facturación y tarifas aplicadas, como se evidenció en el numeral 4.2, situación que condujo a descertificar a Samaná.

En consecuencia, al no encontrarse vulneración de norma alguna aplicable a la materia, el argumento del municipio NO está llamado a prosperar.

4.3.2 Argumentos de legalidad, defensa y contradicción

Argumenta el impugnante, que con la actuación administrativa que culminó con la descertificación del municipio que representa, se vulneró el derecho a la defensa legalidad y contradicción.

Frente al argumento que alega el recurrente, considera oportuno esta entidad, en primer lugar, traer a colación el pronunciamiento que la Corte Constitucional realizó en sentencia T-555 de 2010, respecto del derecho al debido proceso y el derecho de defensa en el ámbito administrativo, veamos:

"Existe una relación inescindible entre el derecho al debido proceso y el derecho de defensa. En tal sentido ha dicho también la Corporación:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

'El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. La administración debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución. En efecto, si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que se revoque o modifique.'[21]

Por tanto, las autoridades que adelantan las actuaciones judiciales y administrativas tienen un doble deber en relación con el derecho de defensa: (i) poner en conocimiento de los interesados las decisiones que adoptan, con el fin que estos puedan ejercer la facultad constitucional de oponerse a ellas y, de manera general, controvertir tanto su contenido como las condiciones sustantivas y procesales para su promulgación, y (ii) garantizar la concurrencia en el trámite de espacios adecuados y suficientes para el ejercicio de dicha facultad de controversia.[22]

También ha dicho esta Corporación[23], que el debido proceso administrativo comprende las garantías necesarias para sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades judiciales o administrativas, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro que el debido proceso constituye un límite material al posible ejercicio abusivo de las autoridades estatales. Así mismo, es desarrollo del principio de legalidad, según el cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les corresponden y el trámite a seguir antes de la adopción de determinadas decisiones. Igualmente, el principio de legalidad impone a las autoridades el deber de comunicar adecuadamente sus actos y el de dar trámite a los recursos administrativos previstos en el ordenamiento jurídico. (...)'

Bajo este panorama normativo y de acuerdo con lo alegado por el municipio, que se vulneró su derecho a la defensa, legalidad y contradicción, se insiste como se desarrolló en el numeral precedente (4.3.1) que al representante legal del municipio de Samaná, se le informó tanto las obligaciones a cargo con relación al proceso de certificación de la vigencia 2012, así como la facultad que le asistía de revisar los diagnósticos que esta entidad efectuó para su municipio, antes de la fecha máxima de cargue, los cuales podían ser consultados en la página web del SUI, a fin de que se allane a cumplir la norma, y que como consecuencia de ello el municipio se certificara.

Adicionalmente, en la Resolución que se recurre, se consignó el criterio que el municipio no acreditó, no obstante lo anterior, le concede al ente territorial la oportunidad legal de impugnar el incumplimiento predicado dentro de los parámetros que la Ley dispone, acto seguido, el representante legal de Samaná interpone el recurso de reposición que hoy nos ocupa, mediante el cual expresa sus inconformidades y argumentos, que fundadamente han sido contestados en este Acto Administrativo, de tal forma que el recurrente pueda observar con claridad, el motivo por el cual no acreditó el aspecto referido.

Con base en el análisis expuesto, se advierte que no hubo violación al derecho de defensa del municipio de Samaná, toda vez que el proceso de certificación en SGP-APSB, vigencia 2012, fue puesto en conocimiento del ente territorial, comunicando y notificando a los interesados las decisiones que se adoptaron, con el objeto que pudieran controvertirlas, garantizando así el debido proceso.

4.3.3 Argumentos de buena fe y confianza legítima

Aduce el señor alcalde de Samaná, que esta entidad, nunca le manifestó al municipio que *"la información no había sido cargada exitosamente, sino todo lo contrario, se manifestaba por la superintendencia a través de la página del SUI, que el municipio había cargado el 100% de los formatos solicitados."*

Al respecto es necesario señalar, que la falencia que se detectó que derivó en el incumplimiento del requisito en discusión, no fue la ausencia de reporte, sino el reporte extemporáneo, ya que como se demostró en el numeral 4.2, el municipio reportó todos los formatos de facturación de aseo (12) y todos los formatos de tarifas aplicadas (12), sin embargo sólo 7 formatos se cargaron en término y 12 y 5 formatos, respectivamente, fueron cargados extemporáneamente, no alcanzando con ello el porcentaje exigido por la norma.

Finalmente, respecto del argumento, referente a observancia de la buena fe y de la confianza legítima, es necesario poner de presente, que esta superintendencia en cada actuación que desempeña, vela por la aplicación no solo de las normas que rigen su ejercicio sino también de los principios constitucionales y legales, en este entendido el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de 1991, prevalece en el proceso que se adelanta, por cuanto ninguna afirmación contenida en la Resolución que se recurre y en la que hoy nos ocupa, esta soportada en una presunta mala fe por parte del municipio, sin embargo, siguiendo los lineamientos que gobiernan el presente asunto, no se puede tener como válidos aquellos reportes efectuados fuera del término establecido por el artículo 7º del Decreto 1639 de 2013, como se mencionó anteriormente, ésta es una norma procesal.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado así⁴: *"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas."*, además advierte que: *"(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo."* y concluye señalando: *"En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."*

"(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio, no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."

4.4.4. Frente a los argumentos del recurrente de ser el proceso de certificación un proceso sancionatorio.

De cara a las aseveraciones del recurrente sobre la descertificación como medida sancionatoria, esta entidad aclara que el procedimiento que se surte para la certificación en el SGP-APSB, no se entiende como una actuación sancionatoria, por ello, las normas procesales que se deben aplicar al presente proceso de conformidad con el artículo 8º del Decreto 1639 de 2013, son las consagradas en el procedimiento administrativo general y no en el sancionatorio como en forma equivocada se pretende hacer ver.

La Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, confiere a las autoridades del sector de servicios públicos la facultad de producir, unilateralmente, actos administrativos particulares y generales; por eso consagra reglas especiales sobre procedimientos administrativos, las cuales están previstas en los artículos 106, 115 y se relacionan con los actos de carácter particular y concreto que las autoridades pueden producir, como lo son las sanciones.

El artículo 79 de la Ley 142 de 1994, establece que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene las funciones de vigilancia, control y sanción de las empresas de servicios públicos domiciliarios; a su vez, el artículo 81 de la misma le consagra las sanciones que puede imponer la SSPD a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Así las cosas, y debido a que la descertificación de los municipios no se encuentra señalada como una sanción de las que pueda imponer esta superintendencia en virtud del ejercicio de la facultad sancionatoria, se aplican las normas del proceso administrativo general y no las del proceso administrativo sancionatorio, se reitera.

Como corolario de lo expuesto, no son de recibo para esta entidad las afirmaciones realizadas por el impugnante en el sentido que esta entidad no le formuló cargos, ni le dio la oportunidad de rendir descargos, por cuanto al haberse regido el proceso de certificación SPG-APBSB, vigencia 2012, por el proceso administrativo y no sancionatorio, tales etapas no se tenían que surtir dentro de esta actuación.

Así las cosas, como sucedió en este caso, era indudable que al dejarse vencer el término señalado en el artículo 7º del Decreto 1639 de 2013 para reportar la información en el SUI, la única decisión viable que podía tomar esta superintendencia consistía en descertificar al municipio de Samaná.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor Wilder Iberson Escobar Ortiz, como alcalde municipal de Samaná, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR a Resolución No. SSPD 20144010011665, del 21 de abril de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

⁴ Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de Samaná, departamento de Caldas, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de Caldas, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides Quevedo - Contratista Grupo de Certificaciones e información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e información

Visto Bueno: Samuel Alfonso Forero - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094011809480354A